

Salamanca, Guanajuato, a 19 diecinueve de octubre de 2020 dos mil veinte, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-35/2020**, promovido por **Arnold XXXXX**, por su propio derecho, en los siguientes términos;

## **RESULTANDO**

**PRIMERO. Promoción de la demanda.** Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 07 siete de julio de 2020 dos mil veinte, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I. La boleta de infracción con número de folio XXXXXX, la cual le fue notificada el 19 diecinueve de marzo de 2020 dos mil veinte.
  
- II. La calificación de la infracción de fecha 24 veinticuatro de marzo de 2020 dos mil veinte referida en el punto anterior, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$869.00 (ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 en Moneda Nacional).

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para obtener la devolución de la placa de circulación que se tuvo que dejar en garantía c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

**SEGUNDO. Admisión de la demanda.** Mediante auto de fecha de 14 catorce de julio de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado de ella a las autoridades

demandadas y se les emplazo para que dieran contestación a la misma. Así mismo se requirió a la Licenciada XXXXXX, para que en el término de 03 tres días registrara su cedula profesional ante este Juzgado Administrativo Municipal.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

**TERCERO. Contestación de la demanda.** Por auto de fecha 28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvo a el ,agente vial, autoridad demandada, por no contestando en tiempo y forma, la demanda entablada en su contra por lo que se le tuvo por ciertos los hechos que se les imputan en el escrito inicial de demanda. Esto de conformidad con el artículo 279 párrafo tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a el Oficial Calificador, autoridad demandada, se le tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, señalando domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como autorizados legales para recibir toda clase de documentos. Además se le tuvo por ofrecida y admitidas las pruebas documentales que aluden en su escrito.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

**CUARTO. Audiencia final del proceso.** Legalmente citadas las partes, siendo las 11:00 once horas con cero minutos del 11 once de septiembre de 2020 dos mil veinte, ninguna de las partes presentó alegatos.

## C O N S I D E R A N D O

**PRIMERO. Competencia.** Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263

párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**SEGUNDO. Certeza del acto impugnado.** La existencia se tiene por acreditado con la boleta de infracción original, con número de folio XXXXX –foja 05-, emitida el 19 diecinueve de marzo de 2020 dos mil veinte adminiculada con la confesión realizada por la autoridad encausada, es decir, oficial calificador, al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

**Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 117,118, 123 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.**

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la boleta de infracción original -foja 05- emitida por la autoridad demandada, en la cual se aprecia la calificación de la multa que aparejo el acto refutado.

**TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento.** Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

Por ende al no haber invocado la autoridad alguna causal de improcedencia que requiera de su estudio ni de esta Juzgadora.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

**CUARTO.** Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a.

/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

**«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

**QUINTO.** En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

**<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).**El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad

demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad<sup>6</sup>. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el **único** concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción XXXXX, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:

A fin de establecer la procedencia del concepto de impugnación, es oportuno fijar el concepto sobre debida motivación y fundamentación de un acto administrativo, lo cual se expone conforme a tesis jurisprudencial VI. 2o. J/248, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 64 de abril de 1993, página 43, con registro 216534, que a la letra dice:

<< **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.** De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.>>

El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipio de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

**<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >>

En la especie, la autoridad demandada asentó dentro del acto impugnado se limitó a señalar con una “X”, en la parte impresa donde señala lo siguiente: “Estacionarse en cajones de estacionamiento exclusivo especial y para personas con capacidades diferentes Artículo 104 fracción VI”.

Lo anterior, si bien es cierto que se cita como fundamento el artículo 104 fracción VI del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, **la demandada sólo señala en “las circunstancias de tiempo modo y lugar que motivaron la infracción”** lo siguiente: “Siendo las 009:43 horas del día 19/03/2020 al encontrarme sobre recorrdio por la calle Vasco de Quiroga frente al numero 100 se visualiza un vehiuco nisaan gris con placas XXXXX violando al Artículo 104 fraccion VI y 58 del Reglamento de Transito para el municipio de Salamanca Guanajuato por lo que se le general boleta de infraccion quedando en garantia placa de circulacion” (sic). Sin embargo la autoridad no describe cómo fue que detecto a través de los sentidos que el actor se encontraba estacionado en el lugar que menciona, tampoco señala si se trata de un señalamiento de tipo restrictivo, prohibitivo o informativo, tal y como se establece en el artículo 59 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca. Para determinar al menos que el actor se encontraba estacionado en un lugar indebido, aunado a esto de que la autoridad tenía que asegurarse primero de que no podía realmente estacionarse en dicho lugar por no contar con ninguna discapacidad, así como también el agente vial señala que el actor no contaba con placa de circulación ni con algun distintivo, sin embargo, no menciona a que se refiere, ni de que tipo, ni la norma jurídica que respalde dicha situación, para poder estacionarce en dicho lugar.

Ademas en el apartado de “en caso de no respetar un señalamiento de vialidad mencionar su tipo y ubicación”.señala lo siguiente: “En el lugar se encuentra pintado cajon y se encuentra señalamiento visible en optimas condiciones visible ubicado de lado poniente”. (sic), sin embargo no hace referencia al tipo de señalamiento ni las características de este. Como tampoco menciona las características de la persona para determinar que no contaba con alguna “capacidad diferente” ni a que se refiere este tipo de señalamiento.

Así mismo, la autoridad demandada no menciona que procedimiento siguió para asegurarse de que la persona no podía estar estacionada en el lugar, pues no asienta si la persona tenía alguna discapacidad o no.

Además en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en su artículo 104 si bien señala en su fracción VI que está prohibido estacionarse en lugares exclusivos para personas “Discapacitadas”. En ese sentido el agente vial se limitó a señalar cual como se encontraba físicamente el actor, no describió como se percató que la actora no contaba con alguna discapacidad o movilidad reducida o que no contaba con la licencia o permiso correspondiente.

No señala los hechos específicos por los cuales la demandada se percató de la supuesta acción cometida, pues no se señalaron las causas específicas que dieron origen a tal consideración, esto es, no especifica cómo se percató que el hoy actor se estacionó en el lugar, tampoco plasma las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma, de tal modo que no exista dudas en relación a las circunstancias en las que acaecieron los hechos narrados en el folio de infracción por la demandada pues no es suficiente motivación para la elaboración de dicho acto

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos, para acreditar en el texto mismo del acto controvertido, cómo se percató que el hoy actor permaneció estacionado en el lugar para personas con “discapacitadas”

Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y que es del tenor literal siguiente:

**«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.**

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto



en agravio del gobernado.». (Octava Época, Registro: 216534, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43.).

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

Así como también, acorde al diverso criterio Jurisprudencial aprobado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señalan:

**«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.** De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.». (Octava Época, Registro: 219034, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 54, Junio de 1992, Materia(s): Común, Tesis: V.2o. J/32, Página: 49.).

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invoco la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponerle la carga de efectuar un pago injustamente habría tenido que soportar, así como imputarle cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad, al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción XXXX se encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

a) El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

b) Dentro del escrito de demanda capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción XXXXXX resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos en esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción XXXXX, de esta manera, por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser remplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, los agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deban señalarse el ordenamiento legal aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa y no en un documento distinto, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada "Criterios 2000-2008" del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

**"INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.-** La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.<sup>1</sup>"

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra sustento legal en la siguiente tesis:

**"TRANSITO, MULTAS DE.** Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso legal,

---

<sup>1</sup>(Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente teórica) en contrario.<sup>2</sup>”

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción XXXXX, elaborada por Teresa XXXXXX, agente vial, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

**“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” - -  
-----

---

<sup>2</sup>Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233. Con registro número 252071

Visto lo anterior y por todo lo antes expuesto queda insubsistente la la calificación de la boleta de infracción por ser un acto viciado derivado del acto administrativo.

**SEXO.** Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a)** el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la placa de circulación misma que se tuvo que retener como garantía.

En cuanto al inciso a) el actor acredito su personalidad y su interes jurídico, asi como la propiedad del vehículo, pues anexa su tarjeta de circulación, misma que se aparejan los datos señalados con los del acto impugano creando convicción en esta juzgadora respecto a que corresponden al mismo acto administrativo que ha quedado anulado y por ende constituye ahora, producto de un acto viciado que el accionante injustamente se vio obligado a resentir. Por lo que al haberse decretado la NULIDAD TOTAL, queda sin efectos dicho acto de autoridad y es dable reconocer la devolución de la placa de circulación.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la devolución la placa de circulación misma que se quedo como garantía de pago, asi mis abstenerce de realizar cualquier cobro por concepto multa, toda vez, que se ha declarado la NULIDAD TOTAL. Lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia. Si bien se le tuvo al agente vial por no contestando el juicio de nulidad en su contra, sin embargo, no lo exime de la obligación de dar total cumplimiento a la presente sentencia.

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de quince días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta

sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

**SEGUNDO.** No se sobresee el proceso, de acuerdo con lo asentado en el **CONSIDERANDO TERCERO** de este fallo.

**TERCERO.** Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

**CUARTO.** Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. -----

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, Juez Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato,

quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta,  
Licenciada **Leslie Haydeé Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe. - - - -